

CA de Santiago

Santiago, veintiocho de Marzo de dos mil veintitrés.

A los folios N° 21 y 23: a todo, téngase presente.

Al folio N° 22: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que a folio 1 comparece doña Catalina Erbs Ávila, abogado en representación convencional de CGE Transmisión S.A., sociedad del giro de transmisión de electricidad, quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 18.410, deduce reclamación de ilegalidad en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por la dictación de la Resolución Exenta N° 12.137, de fecha 10 de mayo de 2022, confirmada por la Resolución Exenta N° 35.534, de fecha 1 de diciembre de 2022, ambas dictadas por la Superintendencia indicada, mediante las que se impuso a su representada una multa de 4.000 Unidades Tributarias Mensuales, y confirmó el monto de la sanción de multa impuesta, respectivamente.

Pide que se acoja el reclamo, declarando ilegales ambas resoluciones, dejándolas sin efecto, absolviendo a la reclamante de los cargos formulados en su contra. En subsidio, se rebaje significativamente la multa.

Explica que los cargos formulados en su contra mediante Oficio Ordinario N° 95.308 de fecha 23 de noviembre de 2021, dicen relación con la interrupción del suministro eléctrico en la línea de transmisión de 66 kv, denominada Temuco-Loncoche N° 2, ocurrida el 26 de febrero de 2021 a las 08:23 hrs, como consecuencia de la caída de un árbol sobre la línea, debido al actuar negligente de terceros distintos de su representada, quienes ejecutaron labores de tala al interior de un predio particular, es decir, más allá de los límites de la faja de seguridad de la línea, sin la previa y exigida coordinación con la reclamante. Dichos cargos se fundaron en el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 139° del DFL N° 4/20.018 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos, en relación con los artículos 205° y 218°, del D.S. N° 327, de 1997, de Minería, Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, lo que se complementa con el artículo 111°, puntos N°s 1 y 4, de



la norma NSEG 5 EN 71, Reglamento de Instalaciones de Corrientes Fuertes, vigente al momento de ocurrir la falla, por no mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de seguridad, en razón de que los planes de mantenimiento definidos para dicha línea, no han sido eficaces para evitar que se originara una desconexión forzada a causa de la caída de un árbol sobre los conductores de esta línea, afectando a 29.834 clientes regulados.

Expone que las resoluciones reclamadas cometen una grave infracción de ley al sancionar a su representada, que ha cumplido con los deberes de mantener sus instalaciones en buen estado y en condiciones de seguridad, y que la causa directa y necesaria de la desconexión fue la actividad de tala, no autorizada, efectuada por un tercero, al interior de una propiedad privada, fuera del área de concesión y la franja de seguridad, por ende, no es reprochable, ni atribuible la falla al concesionario a cargo de la instalación.

Argumenta que de lo resuelto por la SEC, pareciera desprenderse que ante el solo evento de una falla en el sistema eléctrico, debe entenderse que no han existido, o ha existido una deficiente gestión de mantenimiento, instaurando con ello una suerte de responsabilidad objetiva e ilimitada, al margen del deber establecido en el artículo 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos, olvidando que el principio general de responsabilidad en el derecho nacional es un sistema de responsabilidad por culpa.

Refiere que en la Resolución N° 12.312 de mayo de 2021 incurre en error de derecho al haber aplicado la norma técnica NSEG 5 E.N.71, Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, el cual se encontraba derogado por la Resolución N° 33277, en forma previa a la formulación de cargos y al momento de sancionarse a su representada. La SEC se refiere a que los supuestos hechos infraccionados se produjeron bajo la vigencia de la norma derogada, su parte nunca ha desconocido dicha circunstancia, no obstante la administración está obligada en hacer efectiva, especialmente en los procesos sancionadores, la legalidad vigente al momento de sancionar y no efectuar una aplicación ultractiva de la norma.

Sostiene que de acuerdo a la norma, el deber legal que se le imponía a su representada era tener identificados los árboles alrededor de la franja de seguridad proyectada, para hacerles monitoreo constante por si cambian su estado, y no como plantea la SEC, bajo cuyo criterio la reclamante debería



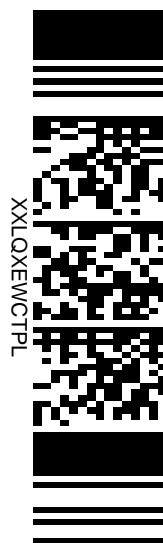
derribar todos los árboles que por proyección pudieran invadir la línea, estén éstos, sanos o enfermos, sin distinción.

En subsidio, solicita se rebaje significativamente la multa impuesta, teniendo en especial consideración lo expuesto en relación a la intervención de terceros en la caída del árbol que produjo la falla de manera de aplicar correctamente lo dispuesto en el Artículo 16 inciso segundo letra d), de la Ley 18.410.

**SEGUNDO:** Que a folio 17 informa la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, solicitando que la acción de reclamo deducida sea desechada en todas sus partes por ser infundada y carecer de sustento válido para su interposición, con costas.

Expone que la reclamación de ilegalidad es absolutamente infundada, y en consecuencia, debe ser rechazada, por cuanto lo obrado por su parte en la expedición del acto administrativo impugnado se ajusta en plenitud a la legalidad vigente y a estrictas consideraciones de racionalidad, que en nada vulneran los principios y normas invocadas. Cita el marco normativo aplicable y sus facultades, argumentando que en atención a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley número 18.410 Orgánica de dicho Servicio: *“corresponde a la Superintendencia fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas del ámbito de su competencia”*. Agrega que el Título IV de la mencionada ley, faculta a la Superintendencia para imponer a las personas o entidades sujetas a su fiscalización o supervisión, que incurran en infracciones a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con la electricidad, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por dicha entidad, una o más de las sanciones que allí se señalan, sin perjuicio de las establecidas específicamente en dicha ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios.

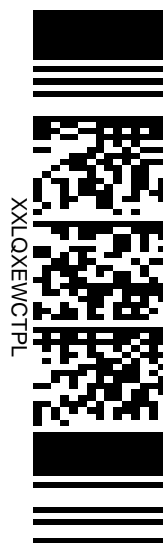
Refiere lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos, en cuanto al deber de todo concesionario de servicio público de mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas de acuerdo con las disposiciones reglamentarias correspondientes, precisando que las infracciones serán sancionadas con las multas que establezca el reglamento, es decir la exigencia debe ser entendida en dos sentidos, por un lado que las instalaciones estén en buen



estado de funcionamiento, de operación y por otro que dichas instalaciones sean seguras. A su vez, refiere que en el mismo sentido el Reglamento Eléctrico dispone en similares términos en su artículo 205, en tanto que, el artículo 218, contempla que *“Los operadores de instalaciones eléctricas deberán incluir en sus programas de mantenimiento la poda o corte de los árboles que puedan afectar la seguridad de sus instalaciones, utilizando técnicas adecuadas para preservar las especies arbóreas...”*. A su vez, la norma NSEG 5 En 71 *“Electricidad. Instalaciones eléctricas de corrientes fuertes”* establece en su artículo 111, puntos 1 y 4, lo siguiente: *“Los árboles que están en la proximidad de líneas aéreas en conductor desnudo, deben ser o bien derribados o bien podados suficientemente para no exponer esas líneas a un peligro”* (Punto 1). *“En las líneas de categoría C, la distancia entre los conductores y los árboles vecinos será igual a la altura de los árboles, pero inferior a 5 metros.”* (Punto 4).

En cuanto a las resoluciones recurridas, expone que con ocasión de la falla ocurrida el 26 de febrero de 2021 en la Línea 66 kv Temuco-Loncoche N° 2, de propiedad del reclamante, recibió por parte del Coordinador Eléctrico Nacional el Estudio para Análisis de Falla, informando que la desconexión forzada de la línea fue debido a caída de árbol que se encontraba fuera de la faja de seguridad sobre los conductores, la que se debió a tala de terceros no coordinada con CGE Transmisión S.A., lo que afectó a 29.834 clientes regulados, los que estuvieron sin suministro eléctrico hasta por 1 hora 5 minutos.

Señala que luego de analizada la información aportada, procedió a formular cargos por no mantener sus instalaciones en buen estado y en condiciones de seguridad, en razón de que los planes de mantenimiento definidos no han sido eficaces para evitar una desconexión forzada. Luego, agrega que analizados los descargos de la reclamante procedió a sancionar a ésta con una multa de 4000 UTM por incumplir la obligación contenida en el artículo 139 de la ley General de Servicios Eléctricos en relación con los artículos 205 y 218 del D.S. N° 327 de 1997, de Minería, reglamento de la ley General de servicios eléctricos, lo que se complementa con el artículo 111, puntos 1) y 4) de la norma NSEG 5 En 71, Reglamento de Instalaciones de



Corrientes Fuertes, la cual fue confirmada por la resolución exenta referida por la parte reclamante.

Argumenta que la infracción al deber de mantenimiento no solo se configura cuando no se realiza mantención alguna, sino que también se configura cuando las mantenciones se realizan de manera deficiente, no permitiendo que las instalaciones cumplan la función requerida, tal como ocurrió en este caso, considerando además que la instalación ha sido afectada por un fenómeno físico similar en tres oportunidades durante los últimos 24 meses móviles, previos a la cuarta falla que motivó el procedimiento administrativo impugnado

Expone que si bien la misma Resolución Exenta N° 33277, de fecha 10 de septiembre de 2020, en sus resuelvo 2° y 3°, derogó la norma NSEG 5 En 71, Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, se dispuso su entrada en vigencia 180 días posteriores a su publicación, verificada el 17 de septiembre de 2020, por lo que ésta sólo comenzó a regir recién en marzo de 2021, ésta se encontraba plenamente vigente a febrero de 2021, fecha de ocurrencia de la falla materia de autos, correspondiendo necesariamente su aplicación a todos los supuestos acaecidos durante su vigencia. En este sentido, según la normativa aplicable, la altura de los árboles ubicados en las proximidades del trazado de una línea de transmisión no debe superar la distancia a la línea, y la evidencia más objetiva de que ha existido una transgresión a esta norma es el hecho de que el árbol talado por terceros cayó sobre la línea porque su altura superaba con creces la distancia a la línea, desde el punto donde se encontraba ubicado. Que, sin perjuicio de lo anterior, lo alegado por la reclamante en cuanto a la aplicación que debería darse al artículo 4.11 del Pliego Técnico Normativo RPTD N° 07, del D.S. N° 109 de 2017, también carece por completo de fundamento. Por el contrario, el análisis de dicha normativa igualmente demuestra el incumplimiento del deber de mantenimiento por parte de CGE Transmisión. De lo anterior, es claro que la normativa no sólo obliga a incluir en los planes de mantenimiento la poda de aquellos árboles enfermos, sino también aquellos que por su altura pudiesen dañar los conductores o estructuras de la línea eléctrica ante una eventual caída, como precisamente ocurrió en este caso, obligación que no se agota en la franja de servidumbre, sino que se extiende a los árboles



vecinos o próximos que, por su altura y condición conocida de salud, inclinación o inminente caída, puedan constituir una amenaza o riesgo para las instalaciones.

La imputación formulada a CGET no es por el hecho de que el árbol haya sido talado por terceros ajenos; eso no la exime de su propia responsabilidad, de haber adoptado las medidas preventivas para evitar la existencia de árboles que por su altura pudiesen dañar los conductores o estructuras de la línea eléctrica en una eventual caída. Si CGET S.A. hubiera ejecutado planes de mantenimiento eficaces y oportunos, no habría permitido la existencia de árboles de altura que pudiesen haber dañado los conductores ante una caída, por lo que, aún en el evento de que terceros hubieran practicado la poda de los mismos, sus ramas no habrían caído sobre los conductores, ese es el fundamento del reproche, que no constituye de modo alguno un régimen de responsabilidad objetiva como denuncia erradamente en su concepto la reclamante, sino su propio incumplimiento culpable.

En cuanto a la petición subsidiaria de rebaja de multa, sostiene que la Superintendencia ha fundado debidamente el acto administrativo y aplicado cada uno de los parámetros que la normativa contempla que deben ser considerados para determinar la sanción y su quantum, particularmente considerando la idoneidad y la necesidad de la medida impuesta, al no existir otro medio para exigir el cumplimiento de la obligación de mantenimiento de sus instalaciones y aplicando una sanción dentro de los límites establecidos, teniendo además presente el hecho de que la infractora registra 3 fallas anteriores a estas, con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles, por lo que se han tenido debidamente en consideración todas las circunstancias del artículo 16° de la Ley N°18.410 para dichos efectos.

**TERCERO:** Que el presente reclamo se sustenta en lo establecido en el artículo 19 de la Ley N°18.410 que autoriza a cualquier afectado por una resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para impetrarlo cuando estime que determinada resolución *“no se ajusta a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponde aplicar”*. Por consiguiente, este tribunal debe revisar si la decisión controvertida adolece de alguna ilegalidad -procesal o de fondo- en el procedimiento administrativo en el que se ha seguido por la autoridad de control.



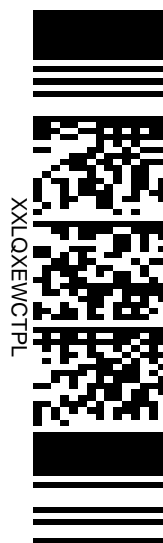
**CUARTO:** Que, en síntesis, los actos reclamados, emanados ambos de la misma autoridad administrativa, son la Resolución Exenta N° 12.137, de fecha 10 de mayo de 2022, y la Resolución Exenta N° 35.534, de fecha 1 de diciembre de 2022. En la primera, la SEC impuso una multa de 4.000 Unidades Tributarias Mensuales, siendo que en la segunda se mantuvo la decisión impugnada.

**QUINTO:** Que no existiendo desconocimiento del supuesto fáctico de la sanción aplicada, esto es la caída de un árbol verificada el día 26 de febrero de 2021, que cayó sobre la línea de transmisión que afectó a 29.834 clientes regulados, refiere la reclamante que su parte ha dado cumplimiento a su deber de mantención y resguardo de la línea, aseverando que el hecho base se produjo por la acción de un tercero dentro de un predio particular más allá de la franja de seguridad, mediante una tala que no fue autorizada ni coordinada previamente con ella, aspecto que no habría sido considerado por la SEC, que le atribuiría una suerte de responsabilidad a todo evento, de carácter objetivo e ilimitado, careciendo de proporcionalidad la multa impuesta.

**SEXTO:** Que el artículo 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos establece que es deber de todo concesionario de servicio público de cualquier naturaleza mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, lo que debe ser relacionado con el artículo 205 de igual texto, en el que se consigna que es deber de todo operador de instalaciones eléctricas en servicio, sean de generación, transporte o distribución y de todo aquél que utilice instalaciones interiores, mantenerlas en buen estado de conservación y en condiciones de evitar peligro para las personas o daño en las cosas.

Por otra parte, el artículo 218 de la misma ley, que requiere a los operadores de instalaciones eléctricas a incluir en su programas de mantenimiento la poda o corte de los árboles que puedan afectar la seguridad de las instalaciones

**SÉPTIMO:** Que, a su tiempo, el artículo 111, puntos 1 y 4 de la NSEG 5 En 71, Reglamento de Instalaciones de Corrientes Fuertes, vigente al momento de ocurrencia de los hechos, señala que los árboles que están en la proximidad de líneas aéreas en conductor desnudo, deben ser o bien



derribados o bien podados suficientemente para no exponer esas líneas a un peligro. Asimismo, se ha señalado que la responsabilidad de la empresa no se agota en la franja de seguridad, manteniendo un criterio de selectividad el que extiende a aquellos árboles vecinos o próximos que por su altura y condición conocidas de salud, inclinación o inminente caída puedan constituir una amenaza o riesgo para las instalaciones, en términos tales que, aunque se produzca la caída de un árbol por la causa que sea, no se vea afectada la línea ni el suministro eléctrico.

**OCTAVO:** Que conforme lo expuesto, existe una normativa legal y reglamentaria que debía cumplir la reclamante, asunto que no ocurrió, al no mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de seguridad, en razón de que los planes de mantenimiento para la Línea Temuco-Loncoche N° 2, no fueron eficaces para evitar la desconexión forzada verificada el 26 de febrero de 2021, debido a la caída de un árbol sobre los conductores de dicha línea, dejando sin suministro eléctrico a 29.834 clientes regulados.

**NOVENO:** Que, como se advierte desde ya, no existe ninguna ilegalidad en el proceder de la autoridad administrativa al dictar las dos resoluciones reclamadas, correspondiendo precisamente a esa Superintendencia fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, máxime en materia eléctrica y verificar la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sean la señaladas en dichas disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas operaciones de mantenimiento para evitar que árboles vecinos o próximos que por su altura y condición conocidas de salud, inclinación o inminente caída puedan constituir una amenaza o riesgo para las instalaciones.

**DÉCIMO:** Que por lo expresado, es que no se advierte en tal proceder vulneración alguna a aquellos aspectos que echa de menos el reclamante, debiendo destacarse que se está ante un reclamo de ilegalidad, esto es, de haber actuado contra ley, infracción que no se advierte en los actos administrativos cuestionados, por cuanto el proceder de la autoridad administrativa reclamada se ajustó a la normativa vigente y contiene los motivos fácticos y jurídicos que las justifican.

**UNDÉCIMO:** Que atendido lo expuesto, esta Corte no divisa la ilegalidad o arbitrariedad que se denuncia, pues como ha quedado ya





referido, los cuestionamientos al proceder del ente fiscalizador carecen de fundamento.

Tampoco será oído el reclamante en cuanto a sustituir o rebajar la multa impuesta, por estimar este Tribunal que ella está acorde con las faltas en que ha incurrido, resultando del todo proporcional a ellas, considerando además que se trataría del cuarto evento de estas características que afecta a la misma línea de transmisión en los últimos 24 meses, lo que permite descartar de plano que se trate de un hecho aislado, imposible de prever, y justifica plenamente la imputación del cargo formulado, en lo relativo a la ineficacia de los planes adoptados por la empresa.

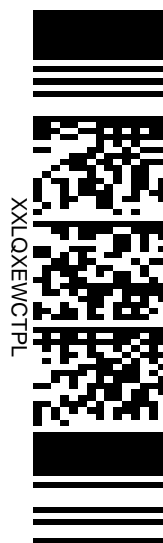
Por estas consideraciones y lo dispuesto en la Ley N°18.840 y su reglamento, se decide:

1.- Se **rechaza, sin costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por Compañía General de Electricidad S.A., CGE en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

2.- El monto consignado para reclamar de la multa se abonará al pago de ella en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley N°18.410, modificado por la Ley N°19.613 (D.O., 8 de junio de 1999). Gírese cheque en su oportunidad.

**Regístrese y archívese en su oportunidad.**

**Contencioso Administrativo N° 682-2022.-**



Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M., Ministro Suplente Sergio Enrique Padilla F. y Abogado Integrante Sebastian Ramon Hamel R. Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

